**ADJUNTO PLANILLA AMPLIATORIA**

Señor Juez:

Julia Tamara Toyos, en mi carácter de Letrado apoderado de la parte actora, constituyendo domicilio legal en calle Belgrano Nº 1188 de esta ciudad de Salta, domicilio electrónico registrado bajo el CUIL 27-26685280-6 en autos caratulados **“ZACUR, MARIA TERESA c/ ANSES s/ REAJUSTES VARIOS” Expte**. Nº 25200045/2012 a V.S. muy respetuosamente digo:

1. **OBJETO**
2. Adjunto planilla ampliatoria
3. Solicito se corra traslado de esta liquidación a la demandada por el plazo de 5 días en el domicilio constituido y bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 504 del C.P.C.C.
4. Intime a la demandada a reajustar el haber bajo apercibimiento de aplicar astreintes ejemplificativas.
5. **Intereses:** solicito fije **intereses sancionatorios** atento a la reticencia de la demandada en cumplir con la manda judicial con el fin de que rectifique el comportamiento contumaz del deudor que se resiste a cumplir con la sentencia recaía en autos, fijándose el mismo en dos veces y media la tasa de descuento ordinario del banco Nación.
6. Solicito actualice la liquidación a la fecha de aprobación conforme la tasa fijada en la sentencia (pasivo comunicado 14290 BCRA) atento al periodo inflacionario que vivimos y la demora del juzgado producto del incumplimiento sistemática de Anses en cumplir INTEGRALMENTE la manda judicial.
7. Dejo planteada la inconstitucionalidad de la ley 27.609 , ley 27.541 , ley 27.426 .
8. **Solicito que se regulen los honorarios profesionales correspondientes a esta incidencia previa, necesaria para la ejecución**, conforme al artículo 52 de la Ley 27.423, que establece la obligatoriedad de regular los honorarios al dictarse sentencia. Asimismo, se debe respetar el honorario mínimo previsto en el artículo 16, último párrafo, de la ley, que es de orden público. La regulación deberá expresarse en moneda de curso legal y en Unidades de Medida Arancelaria (UMA), según el artículo 51, siendo el pago definitivo al abonarse el equivalente en UMA vigente. Solicito que se consideren los intereses, frutos y accesorios como parte de la base regulatoria.
9. Solicito que se otorgue prioridad de pago en favor de mi mandante, en virtud de su edad avanzada, conforme a lo dispuesto en el artículo 4 de la Resolución de la Secretaría de Seguridad Social [N° 56/97](https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/40000-44999/44974/texact.htm). Asimismo, solicito que se notifique expresamente esta resolución a la demandada ANSES y se la intime a otorgar trámite prioritario al expediente administrativo correspondiente.
10. **Amplia liquidación**

El 01/01/2025 el juez de grado aprobó la liquidación de esta parte

1. **Adjunto liquidación**

Que vengo iniciar ejecución de sentencia por las diferencias adeudadas, no obstante existir una liquidación aprobada por VS, adjunto retroactivo por todo el período que va desde el 01/01/2025 al 01/01/2025.

1. **Documenta**l: La planilla se confecciono en base a la información brindada por la Anses (PRPA más recibos) y las sentencias recaídas en autos:

Sentencia de 1 ra instancia de fecha: 25/07/2003

Sentencia de 2 da instancia, Sala I, de fecha: 25/07/2003

Aprobación de liquidación al 01/01/2025.

Adjunto retroactivo.

1. **CONSIDERACIONES**:

Que vengo por la presente a promover ejecución de sentencia por las diferencias e intereses de los haberes no redeterminados por la ANSeS adeudados por el período comprendido entre **01/01/2025 al 01/01/2025**

* **Percibido:** Se parte de un Haber Percibido de $518,37 del 01/08/2008
* **Reclamado:** El Primer Haber Reclamado es de $1.276,08 del 01/08/2008
* **Reparación histórica:** NoPercibió.
* **Asignación complementaria:** NoPercibió.
* **Suplemento dinerario**: Percibió suplemento dinerario creado por el art 125 bis Ley 24.241 (s/texto Ley 27.426, Art. 5°) hasta alcanzar el 82% del SMVM.
* **Tope**
* Se aplico el tope del artículo 9 inc. 3 de la ley 24.463.
* **Obra Social**: Los saldos retroactivos son calculados netos del Descuento por Obra Social.
* **Confiscatoriedad**: Sobre estos montos no se ordena la aplicación de quita alguna, por lo que se liquidó sin Confiscatoriedad desde el inicio hasta el fin del periodo analizado.
* **Intereses:** se calcularon hasta el 01/01/2025 aplicando para ello la Tasa Pasiva para uso de la Justicia (Com. 14290 BCRA).

**Opción 1**

* **Movilidad:** Salarios Nivel General INDEC hasta el 31/12/2006 y desde ahí Aumentos Generales de la ANSeS por movilidad hasta el 31/12/2017 y desde ahí Aumento de Marzo 2018 Ley 26417 14,6% hasta el 30/06/2018 y desde ahí Aumentos Generales de la ANSeS por movilidad hasta el 31/12/2019 y desde ahí Aumentos fallo Marquez, Raimundo por Ley 27551 hasta el 31/12/2020 y desde ahí Aumentos Generales de la ANSeS por movilidad
* **Haber de Alta Reclamado** al 01/01/2025asciende a $252.798,48.
* **Retroactivo** exigible al 01/01/2025 determinado por el periodo 01/01/2025al 01/01/2025 en concepto de Capital resulta en $7.071.986,26 concepto de Intereses a $ 1973179.65.

**Monto adeudado por diferencias no abonadas de $4.727.998,55**

**Opción 2**

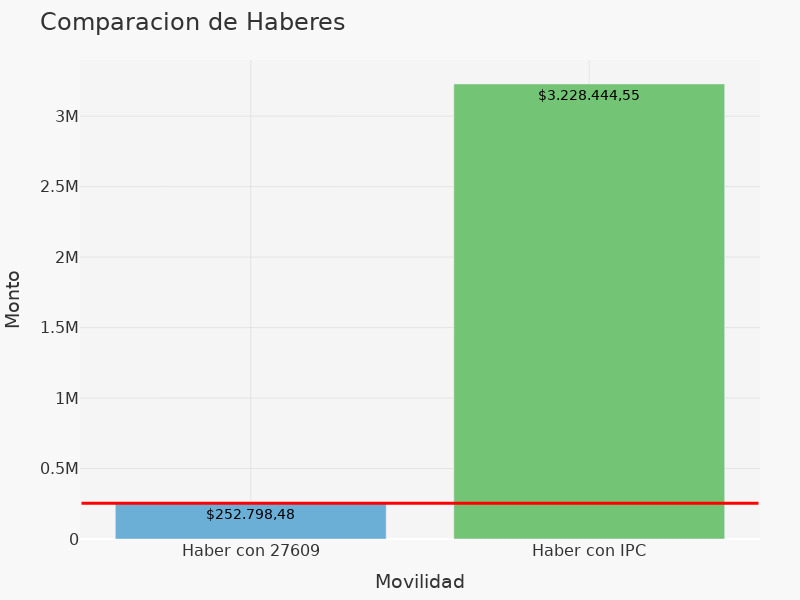
* **Movilidad:** Movilidad de Segunda liquidacion
* **Haber de Alta Reclamado** al 01/01/2025asciende a $1.644.046,07.
* **Retroactivo** exigible al 01/01/2025 determinado por el periodo 01/01/2025al 01/01/2025 en concepto de Capital resulta en $5.629.860,39 concepto de Intereses a $ 3.820.199,93.

**Monto adeudado por diferencias no abonadas de $** **$6.095.271,42**

**Se adjunta una tercera y cuarta liquidación,** aplicando los siguientes guarismos:

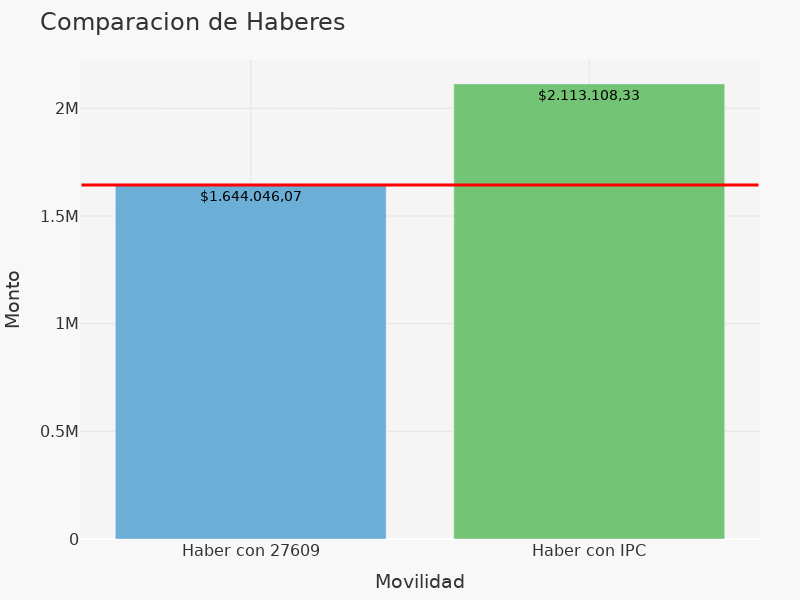
* **Movilidad**: se aplica Salarios Nivel General INDEC hasta el 31/12/2006 y desde ahí Aumentos Generales de la ANSeS por movilidad hasta el 31/12/2017 y desde ahí Aumento de Marzo 2018 Ley 26417 14,6% hasta el 30/06/2018 y desde ahí Aumentos Generales de la ANSeS por movilidad hasta el 31/12/2019 y desde ahí Aumentos fallo Marquez, Raimundo por Ley 27551 hasta el 31/12/2020 y desde ahí Ley 27551 (50 % IPC y 50% RIPTE Trimestral retrasado 3 meses) hasta el 31/03/2024 y desde ahí Aumentos Generales de la ANSeS por movilidad
* **Retroactivo** exigible al 01/01/2025 determinado con estos índices de movilidad por el periodo 01/01/2025 al 01/01/2025 en concepto de Capital resulta en $ 12.861.471,40 concepto de Intereses a $ 221.024,59 totalizando una deuda dotal de $$15.937.498,98.

|  |  |
| --- | --- |
| Haber con IPC | $3.228.444,55 |
| Haber con 27609 | $252.798,48 |
| Dif | $2.975.646,07 |
| Quita | 92.17% |



* **Movilidad**: se aplica Salarios Nivel General INDEC hasta el 31/12/2006 y desde ahí Aumentos Generales de la ANSeS por movilidad hasta el 31/12/2017 y desde ahí Aumento de Marzo 2018 Ley 26417 14% hasta el 30/06/2018 y desde ahí Aumentos Generales de la ANSeS por movilidad hasta el 31/12/2019 y desde ahí Aumentos fallo Marquez, Raimundo por Ley 27551 hasta el 31/12/2020 y desde ahí Ley 27551 (50 % IPC y 50% RIPTE Trimestral retrasado 3 meses) hasta el 31/03/2024 y desde ahí Aumentos Generales de la ANSeS por movilidad
* **Retroactivo** exigible al 01/01/2025 determinado con estos índices de movilidad por el periodo 01/01/2025 al 01/01/2025 en concepto de Capital resulta en $ 221.024,59 concepto de Intereses a $ 221.024,59 totalizando una deuda dotal de $$26.576.663,39.

|  |  |
| --- | --- |
| Haber con IPC | $2.113.108,33 |
| Haber con 27609 | $1.644.046,07 |
| Dif | $469.062,26 |
| Quita | 22.2% |



Como se puede apreciar al aplicar índices de movilidad distintos, obtenemos diferencias de 92.17% y 22.2% entre un haber y el otro, por lo expuesto solicitamos a considerar aprobar los guarismos que resulten de un beneficio mayor para mi mandante, con el fin de obtener un monto de jubilación en donde el mismo sea más acorde en caso de haber seguido en actividad.

1. **DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY 27.609**

La Ley 27.609 ha demostrado ser insuficiente para mantener el poder adquisitivo del haber de mi mandante a lo largo del tiempo, afectando derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional, como la garantía de integralidad (art. 14 bis), el derecho de propiedad (art. 17), el derecho al desarrollo humano (art. 75, inc. 22) y los derechos derivados de los tratados internacionales (art. 75, inc. 23). Por sobre todo, vulnera el derecho a la vida y a una vejez digna.

Teniendo en cuenta las circunstancias jurídicas ocurridas desde 2020 hasta la fecha —esto es, la suspensión de la Ley de Movilidad Jubilatoria por la Ley 27.541, la derogación de la Ley 27.426, la sanción de la Ley 27.609 y su posterior derogación, y la pauta de movilidad dictada por el Decreto 274/24—, resulta claro que los haberes de los jubilados han sufrido un daño tangible.

Los fallos “Márquez” y “Cendán” de la Sala II, y “Luna” de la Sala I, presentan diferencias en el análisis de la Ley 27.609 durante la etapa de ejecución. Además, a la fecha de presentación de la liquidación, no existe un índice definido para aplicar al período en cuestión. Este diferimiento es innecesario, ya que el daño causado por la ley de movilidad en los haberes de los jubilados es evidente, público y notorio, tal como lo ha reconocido expresamente el Gobierno Nacional en el Decreto 274/24.



El propio Estado ha reconocido las falencias e insuficiencias de la fórmula establecida por la Ley 27.609 y el daño que ha causado a los adultos mayores, justificando con ello la necesidad de dictar el Decreto de Emergencia 274/24. Dicha ley ya no está vigente, y el daño ocasionado ha sido admitido tanto por el Poder Legislativo como por el Poder Ejecutivo, demostrando que los aumentos otorgados fueron insuficientes para preservar el poder adquisitivo del haber previsional de mi mandante.

Los bonos entregados a los jubilados que perciben la mínima llegaron a representar hasta un 55% de su haber mensual. Las sucesivas reformas previsionales implementadas desde 2017 hasta la fecha han afectado de manera integral el haber jubilatorio de los beneficiarios, y deben analizarse de manera conjunta, ya que el haber de mi mandante es uno solo. La aplicación de las normas dictadas entre 2017 y 2024 incumple con el mandato constitucional, omitiendo el contenido previsto por el convencional constituyente al atribuir al Poder Legislativo la obligación de fijar por ley el derecho a la movilidad jubilatoria y no de cualquier manera.

Como lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación:  
"La Constitución Nacional ha reconocido el derecho a la movilidad, no como un enunciado vacío que el legislador puede llenar de cualquier modo, sino que debe obrar con el objeto de darle toda su plenitud, que no es otra que la de asegurar a los beneficiarios el mantenimiento de un nivel de vida" (Fallos 330:4866, considerando 15). Si bien el legislador tiene amplias facultades para organizar el sistema previsional, debe hacerlo dentro de límites razonables, de modo que no afecte sustancialmente los derechos emergentes de la seguridad social (Fallos 337:1277).

La afectación del derecho a la movilidad jubilatoria conlleva también una lesión al derecho de propiedad, al derecho a una vejez digna, a la libertad y a la vida misma, ya que la disminución del haber coloca al jubilado por debajo de la línea de pobreza. El haber previsional no refleja el esfuerzo contributivo realizado durante toda una vida laboral y, por ende, no resulta sustitutivo del salario.

Además, los otros dos poderes del Estado han admitido expresamente el fracaso de la fórmula de movilidad jubilatoria, la pérdida de poder adquisitivo que generó en los jubilados y la situación de emergencia en la que los colocó. Sin embargo, las soluciones propuestas miran hacia el futuro, ignorando la necesidad de recomponer el daño del pasado.

Como sostuvo la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Fallos 301:317:"La Constitución Nacional establece que 'el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social' y dispone que las jubilaciones y pensiones serán móviles. Es indudable que este mandato constitucional se dirige primordialmente al legislador, que debe establecer criterios adecuados a la realidad para determinar los haberes previsionales. Sin embargo, los cambios de circunstancias pueden tornar irrazonable una solución legal que en su inicio fue correcta. En tales casos, el cumplimiento del mandato constitucional atañe también a los restantes poderes públicos, que deberán, dentro de su competencia, hacer prevalecer el espíritu de los constituyentes conforme a las exigencias de justicia" (el subrayado me pertenece).

El análisis no puede ser sesgado. Lo que en su momento pudo ser razonable se ha tornado irrazonable ante el cambio de circunstancias, como lo evidencia el análisis de constitucionalidad de la Ley 27.609 en la etapa de ejecución. La movilidad jubilatoria otorgada por esta ley quedó muy por debajo de la inflación, como se acredita en autos.

Dependerá del índice que se elija para comparar los aumentos otorgados por ANSES a los jubilados determinar la pérdida real del haber. No obstante, con cualquier índice que se utilice, siempre habrá pérdida, siendo la más significativa frente al índice inflacionario, que ahora se aplicará para la movilidad jubilatoria a partir de abril de 2024. La fórmula de movilidad de la Ley 27.609 no consideraba la inflación como un componente directo, sino otras variables, como la recaudación tributaria, los recursos y los beneficiarios del sistema, variables que fueron modificadas por el gobierno de turno. Además, los aumentos otorgados presentan un rezago insostenible de 6 a 9 meses, lo cual agrava la situación en el contexto inflacionario que atravesamos

Los bonos otorgados a las jubilaciones mínimas en vigencia de la ley 27.609, parecería colocar a los jubilados en una situación similar a lo que sucedió en el período 2002 a 2006 que obligó a que la CSJN dictara el fallo Badaro ([330:4866](https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=6359051)) y eligiera un índice salarial para el período en cuestión. En la actualidad un índice salarial no sería adecuado, por cuanto todos los índices salariales que se tomen de referencia se ven afectados por la precarización laboral, la práctica de fijar sumas no remunerativas, la caída del empleo, por lo que los índices salariales, salvo el UMA, no refleja una variación real de los salarios y están muy alejados de la inflación en mayores periodos inflacionarios.

Solicito analice el pedido de inconstitucionalidad teniendo en cuenta el desarrollo que hace la CSJN sobre el [principio de progresividad](https://sj.csjn.gov.ar/homeSJ/notas/nota/22/documento) en materia previsional y el propósito constitucional de promover el bienestar general y afianzar la justicia el cual debe ser entendido como una virtud al servicio de la verdad sustancial, lo cual se expresa mediante pronunciamientos que conduzcan a consagrarla, así dice: *"Cuando un precepto frustra o desvirtúa los propósitos de la misma ley en que se encuentra inserto, de modo tal que llega inclusive a ponerse en colisión con enunciados de jerarquía constitucional o su aplicación torna ilusorios derechos por éstos consagrados, le es lícito al juzgador apartarse de tal precepto y dejarlo de aplicar a fin de asegurar la primacía de la Ley Fundamental, como medio de afianzar la justicia que está encargado de administrar. Asimismo, señaló que la latitud de facultades que se ha reconocido al legislador para organizar los sistemas jubilatorios y establecer las condiciones con sujeción a las cuales se acuerdan los beneficios derivados de aquéllos, debía entenderse condicionada a que esas facultades se ejerciten dentro de límites razonables, o sea de modo que no hieran de manera sustancial los derechos emergentes de la seguridad social, acordados a las personas comprendidas en los regímenes previsionales”* ([Fallos: 307: 2376](https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoSumario.html?idDocumentoSumario=24586)), es por lo que solicito al tribunal garantice el derecho a que mi mandante tenga un haber integral y una movilidad jubilatoria que cumpla con su función, que no es otra que mantener el poder adquisitivo del haber jubilatorio, de manera tal que sea sustitutivo del salario y refleje el esfuerzo contributivo realizado durante su vida laboral activa, teniendo en consideración la protección especial que merecen los adultos mayores como sujetos vulnerables que gozan de especial tutela, en concordancia con lo resuelto en los Fallos [“Itzcovich”(](https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=5796151)328:566),[“Sánchez”](https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=5838941)(328:1602),[“Badaro”(](https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=6359051)330:4866),[“Blanco”(](https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7496611)341:1924)[“Giménez”(](https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7678911)344:1788), “[Garay Corina](https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7717371)” (344:3567) entre otros.

Las modificaciones en la fórmula de cálculo de la movilidad previsional, no puede proyectarse en perjuicio de los jubilados y pensionados, debiendo adoptarse una solución que se adecue a los principios y garantías de la Constitución Nacional y favorezca la progresividad de los derechos humanos. Al respecto cabe recordar que el Alto Tribunal sostuvo que el artículo 75, inciso 23, de la Constitución Nacional fortalece la vigencia del principio de progresividad en materia previsional, descalificando todo accionar gubernamental que en la práctica de un resultado regresivo en el goce efectivo de los derechos [(Fallos 331:250](https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=6398361&cache=1628881211401)).

Cada reforma previsional en nuestro país se ha desarrollado en un marco de sucesivas emergencias casi inacabables, lo que lleva a cuestionarnos, como bien señala Cassagne, si estas reformas cumplen con “el marco constitucional de la emergencia”. Según este autor, dicho marco requiere que “no se conculque de un modo definitivo el núcleo de derechos básicos de la Constitución, particularmente los derechos de propiedad de los particulares (art. 17), el principio de igualdad ante la ley (art. 16) y la garantía de la razonabilidad o justicia, consagrada en el art. 28 de la Constitución Nacional”.

La normalización de la emergencia y sus graves consecuencias en el cercenamiento de derechos constitucionales son tan evidentes que el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación advirtió hace más de diez años: *"Cabe valorar las consecuencias de la amplia tolerancia a las restricciones de los derechos contractuales por razones de emergencia consolidada a lo largo de más de setenta años. Las legislaciones de excepción tienen un plazo para que se produzca su propia extinción, pero su prórroga y su reiteración han inutilizado los mecanismos de autodestrucción y han alimentado los que permiten su conservación. De tal modo, la excepción se ha convertido en regla y los remedios normales han sido sustituidos por la anormalidad de los remedios. Esta fundamentación de la regla de derecho debilita el compromiso de los individuos con las leyes y los contratos, ya que la emergencia permanente destruye todo cálculo de riesgos y restringe el funcionamiento económico."*

Este estado de emergencia permanente ha generado un Estado que prioriza variables económicas y financieras coyunturales sobre las libertades y derechos fundamentales. Ante el altar de la emergencia, el Estado, ya sea por acción u omisión, ha sacrificado sistemáticamente derechos elementales reconocidos por la Constitución Nacional, especialmente los de los grupos más vulnerables. Esto ha dado lugar a la violación de principios fundamentales, como el de progresividad y no regresividad, que exigen un escrutinio agravado de la razonabilidad de las normas adoptadas tanto por el legislador como por el Poder Ejecutivo Nacional en contextos de emergencia.

Como afirma Rossi, las medidas regresivas que afectan a grupos vulnerables deben ser excepcionalísimas y sometidas a un escrutinio más estricto. La deferencia hacia el Estado en la adopción de estas medidas debe ser mínima, ya que el contenido mínimo de un derecho no admite restricción alguna, ni tampoco lo admite el estado de goce y ejercicio de un derecho por grupos desfavorecidos.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, al referirse a la emergencia y los grupos vulnerables, sostuvo: *"Que, por último, cabe destacar que es precisamente en tiempos de crisis económica cuando la actualidad de los derechos sociales cobra su máximo significado. En tales etapas críticas, deben profundizarse las respuestas institucionales en favor de los grupos más débiles y postergados, pues son las democracias avanzadas y maduras las que refuerzan la capacidad de los individuos y atienden las situaciones de vulnerabilidad en momentos coyunturales adversos"* (Fallos 341:1924).

Por lo expuesto, en casos como el presente, la prohibición de regresividad agrega un nuevo criterio al control de razonabilidad de las leyes y reglamentos. Esto es especialmente relevante cuando se examinan judicialmente normas que afectan derechos económicos, sociales y culturales. Por ello, solicito a V.S. que haga lugar a la petición formulada y se intime al Congreso de la Nación a cumplir con el mandato del art. 14 bis de la Constitución Nacional, reparando el daño sufrido en el haber de mi mandante. Esto implica fijar el contenido concreto de las jubilaciones en el período en debate, como sostuvo la CSJN en el caso “Blanco”, con especial consideración de los principios de proporcionalidad y sustitutividad establecidos por este Tribunal en precedentes como Fallos 279:389, 280:424, 292:447, 293:235, 300:84, 571, 305:866, 328:1602.

Asimismo, estos principios, que en el fallo “Blanco” se referían al índice de actualización de remuneraciones, son igualmente aplicables a la pauta de movilidad. Solo con esta perspectiva integral se podrá garantizar la plena efectividad de los derechos consagrados en nuestra Ley Fundamental y proteger a los sectores más vulnerable.

1. **INCOSTITUCIONALIDAD DE LA LEY 27.426**

Esta parte solicita la inconstitucionalidad del art 2 de la ley 27.426: “ *la primera actualización en base a la nueva movilidad dispuesta se haría efectiva a partir del 1° de marzo de 2018.*”

La constitucionalidad de una norma que fije nuevas pautas de movilidad reconoce un límite temporal que no puede ser infringido sin lesionar derechos constitucionales de los beneficiarios y afectando los s derechos de los jubilados por cuanto la norma pretende tener vigencia desde antes de su sanción, alterando la situación jurídica consolidada al amparo de una norma anterior. La incidencia del mismo en el haber de mi mandante afecta derechos constitucionales lo cual torna inconstitucional al art 2 de la ley 27.426.

La modificación de la ley de movilidad no solo plantea un cambió en la fórmula determinada para calcular la movilidad de las prestaciones, lo cual está bien porque es una facultad del congreso, pero que además establece que la primera actualización se practicará en marzo de 2018, afectando con ello la movilidad que para dicho mes ya se había devengado de conformidad con la normativa anterior pretendiendo así aplicarse retroactivamente.

El art 7 Código Civil y Comercial de la Nación establece respecto de la eficacia temporal de las normas que *“a partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales”.*

Es decir que a la relación o situación ya constituida se le aplicará la ley nueva sancionada, para regir las instancias aún no cumplidas de dicha relación/situación. Solo las instancias ya finalizadas estarán regidas por la ley anterior.

Ahora bien, la norma, cuya inconstitucionalidad se peticiona, al derogar la anterior fórmula de movilidad establecida por la Ley 26.417, dejó sin efecto el ajuste que ésta contemplaba y ordenó aplicar un nuevo cálculo de la movilidad a periodos abarcados por la anterior ley, con carácter retroactivo, alterando con ello el alcance jurídico de las consecuencias de los actos o hechos realizados en su momento bajo el anterior régimen legal.

Es decir que en el supuesto de haberes percibidos bajo el régimen anterior, donde la situación jurídica se consolidó al amparo de la ley derogada, y respecto de los cuales mi mandante tenía un derecho adquirido a que el reajuste se realizara conforme la misma, la modificación de la fórmula produjo en lesión constitucional del derecho de propiedad, dado que la misma arroja un porcentaje de actualización sensiblemente inferior al que resultaría de aplicar la anterior norma y deja fuera del cálculo todo un trimestre que ya se había devengado.

Por Resolución E 2/2018 de la S.S.S., el valor de la movilidad correspondiente al mes de marzo de 2018, fue establecido en un 5,71%, conforme lo previsto en la Ley 27.426 cuando el porcentaje previsto conforme la fórmula de la Ley 26.417, estaba estimado entre un 12% y 14% arrojando finalmente un aumento en marzo de 2018 de 14.06%.

La Ley 27.426 establece que la recomposición del haber se dará en marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año. Para determinar el porcentaje correspondiente a marzo se considerará el porcentaje que arroje la fórmula en función de la variación del IPCN y del RIPTE en el tercer trimestre del año previo (julio – septiembre). Para junio, se tomarán los datos del período que va de octubre a diciembre; y así sucesivamente (para septiembre y diciembre, las referencias del primer y el segundo trimestre respectivamente).

En otras palabras, para el aumento de marzo 2018, con la normativa anterior el cierre se hubiese producido el 31.12.2017, mientras que, con la nueva fórmula, dicho cierre se retrotrajo a septiembre de 2017, cuando ya se habían devengado más de 5 meses y 29 días, que conforme la ley 26.417, hubiesen formado parte de la movilidad de marzo 2018. Produciéndose así un atraso de seis meses en el periodo de referencia, y difiriéndose el último trimestre para el aumento correspondiente a junio de este año.

Esta última cuestión pretendió ser zanjada mediante la sanción del Dto. 1058/2018 que dispuso el pago de un “subsidio extraordinario” por única vez, y solo aplicable a aquellos beneficiarios que no perciben haberes superiores a los $10.000 Claramente, dicho subsidio extraordinario – que fue otorgado teniendo en mira las consecuencias que sobre los haberes de los pasivos tendría la sanción de la Ley 27.426 pero no alcanza a paliar el gravamen producido, desde el momento en que es otorgado por única vez, y no se aplica a la totalidad del universo de beneficiarios, sino solo aquellos que su prestación es inferior a la suma de $10.000 y que no es el caso de mi mandante, por lo que no cobró ese bono.

La merma en el haber de mi mandante aunque en el momento, 03-2018, no se considere “confiscatoria” por ser del 8.9%, el no haber aplicado el régimen de la ley 26.417 ya devengado, afecta derechos alimentarios que cuentan con garantía constitucional y vulnerando así los arts. 14 bis y 17 de la C.N, a la larga si se producirá la confiscatoriedad, ya que al tener mal determinado el haber de marzo de 2018, los sucesivos aumentos se harán sobre un haber mal movilizado, conforme lo acredito en la liquidación que adjunto.

Solicito expresamente se declare la inconstitucionalidad del art 2 de la ley 27.426, y se ordene que la movilidad correspondiente al mes de marzo de 2018 sea determinada de conformidad con las pautas fijadas en la Ley 26.417, debiendo empezar a aplicarse la nueva movilidad establecida por Ley 27.426 a partir del incremento correspondiente al mensual septiembre 2018.

1. **INCOSTITUCIONALIDAD DE LA LEY 27.541**

Al haber visto que los aumentos de 2020 dados por decreto fueron muy inferiores a los que hubiera correspondido conforme ley 27.426, solicito se expida y declare la inconstitucionalidad de la ley 27.541, del art 1 en cuanto declara la emergencia previsional , del art 2 inc. e, del art 55 y 56, como así también de los decretos 163/2020, 495/2020 , el 542/2020, 692/2020, y 899/2020 , en cuanto otorga aumentos insuficientes, extiende por 6 meses más la suspensión establecida por el art. 55 de la ley 27.541 respecto de la aplicación de la movilidad dispuesta por el art. 32 de la ley previsional 24.241 por ser confiscatoria, por violar el principio de igualdad y de razonabilidad de las leyes previsto en los art 16 y 28 de la CN y el principio de progresividad garantizado por la ley 27.360 que ratifica la convención interamericana de adultos mayores.

Dictados los decretos 163/2020, 495/20, 542/2020 y 692/2020 y 899/2020 solicito VS se expida y declare la inconstitucionalidad de la ley 27.541, y sus decretos reglamentarios, por ser confiscatoria, por violar el principio de igualdad y de razonabilidad de las leyes previsto en los art 16 y 28 de la CN y el principio de progresividad garantizado por la ley 27.360 que ratifica la convención interamericana de adultos mayores. La ley y su reglamentación es inconstitucional por los siguientes motivos:

1. Porque al igual que el art 2 de la ley 27426 es regresiva, y afecta

el principio de progresividad

1. No debió haberse delegado la facultad de fijar una garantía

constitucional como es la movilidad jubilatoria.

1. No respeta las bases de la delegación del art 2 inc e.
2. No cumple con los recaudos formales y sustanciales de la doctrina de la emergencia
3. El art 56 establece un régimen diferenciado contrariamente a lo normado por el art 2
4. Los índices, y por lo tanto la movilidad ya se habían devengado al momento de sancionada la ley de emergencia
5. Los decretos son insuficientes e irrazonables y no cumplen con la garantía de movilidad jubilatoria del 14 bis.
6. Se suspendió la movilidad solo al régimen común que es el que menos percibe.
7. No cumple con la integralidad del haber y la jubilación no guarda su finalidad que es mantener el valor adquisitivo en el tiempo. Perdida en 2020:

Imagen que contiene Interfaz de usuario gráfica

Descripción generada automáticamente

1. **OPORTUNIDAD PROCESAL**

Si bien esta liquidación es posterior al dictado de la sentencia, la suspensión de la fórmula de la movilidad incide en el haber jubilatorio de mi mandante, lo mismo que la nueva fórmula.

Esta parte plantea la inconstitucionalidad las leyes que afectaron la movilidad jubilatoria, por cuanto “Anses”, afecta la seguridad jurídica de mi mandante, pues al modificar la ley ante cualquier cambio de gobierno o vicisitud económica, siempre en detrimento de su haber y afectando la garantía constitucional de integralidad de este, la división de poderes, la delegación de facultades entre otras normas de nuestra CN.

Los planteos fueron posteriores a la sentencia por cuanto la modificación de las pautas de movilidad, que alteran el haber de mi mandante, también fueron posteriores al dictado de esta.

En la primera oportunidad procesal se está solicitando la inconstitucionalidad de las normas cuestionadas y se garantiza así el debido proceso y el derecho de defensa de la contraria, corriéndose traslado del planteo de inconstitucionalidad, de una norma que suspende la ley ,en detrimento de un grupo vulnerable, en época de pandemia donde el estado debe reforzarse la protección de los mismos y de carácter netamente regresivo según la perdida sufrida en 2020.

Así que no se busca repotenciar un haber sino defender la garantía constitucional de movilidad jubilatoria.

Antes que nada, no se puede perder de vista que la CSJN ha reconocido la facultad de los jueces y tribunales inferiores de ejercer un control de constitucionalidad y de convencionalidad de oficio (Fallos 335: 2333).

En el caso puntual de la movilidad, las sucesivas reformas de la ley producidas entre 2018 a 2023 han afectado el derecho constitucional a tener un haber integral, al afectarse la movilidad jubilatoria la cual deja de cumplir con su finalidad, que es mantener el valor del haber en el tiempo, a lo que suman diferentes análisis , como son que en materia de movilidad no pueden existir periodos superpuestos, ni tiempos muertos , sin perder de vista que en materia de emergencia, sino se recompone el haber , cesada la emergencia, la misma permanecerá en el tiempo.

Es por ello que el juez , puede resolver en la etapa de ejecución, sea a pedido de parte, o de oficio, si estas normas afectan el haber dado que contrarían el art 14 bis, 16, 17, 18, 28 , 31 , 33 y 75 inc 22 y 23 de la CN.

En los autos Abraham[[1]](#footnote-1) el juez , al momento de tener que resolver en la liquidación donde la parte actora introdujo la cuestión en torno a la consideración inconstitucional de la leyes 27.426, 27.541 y 27.609, considero que si análisis “*deviene ineludible toda vez que incide en la determinación de la movilidad que en definitiva corresponde aplicar al haber cuyo reajuste aquí se reclama y en un todo de acuerdo con la doctrina que impone atender a las circunstancias sobrevinientes que no es posible desechar (Fallos: 308:1489; 311:787; 312: 555; 315:123 y 325:28, entre muchos otros).*

*Ello de ninguna manera importa incurrir en un exceso de jurisdicción, sino que, por el contrario, implica valorar en debida forma las pretensiones incoadas a la luz del derecho vigente al momento de sentenciar, encontrando también tal proceder su fundamento en los principios de celeridad y economía procesal.*

*Destáquese al respecto, que dada la naturaleza de causas como la que nos ocupa -que resultan de monto indeterminado pues se originan en obligaciones de cumplimiento sucesivo- deben existir pautas claras para el momento de liquidarse las sumas de condena.”*

Del mismo modo, en **“Gamarra”** [[2]](#footnote-2)la cámara federal de Salta se pronunció respecto al planteo de cosa juzgada, y aclaró que una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada *“****no implica la imposibilidad absoluta de resolver nuevas cuestiones que puedan suscitarse entre idénticas partes, sino el sucesivo y reiterado juzgamiento de las mismas”****. Y concluyó que, si existe una sentencia que reconoció el derecho a la redeterminación del haber inicial y su movilidad, “(…) es en esta oportunidad, etapa de ejecución (arts. 499 y cc del CPCCN) que se puede tener precisión respecto de la cuantía del haber y la razonabilidad o no de la quita por aplicación de la norma citada (…)”*

En similar sentido se expresó la Sala I en los autos “Flores Humberto c/Anses y otro s/ Reajustes varios” Expte 15100027/2011 el 09.03.2023 donde resolvió: *“Que corresponde rechazar los agravios referidos a la improcedencia de resolver en la etapa de ejecución el reajuste de la movilidad del haber del actor por períodos posteriores que no se encuentran incluidos en la sentencia definitiva, en tanto las partes han tenido oportunidad de debatir sobre dicha cuestión, por lo que se ha respetado el debido contradictorio.*

*Es que resultaría un exceso ritual rechazar dicha pretensión y obligar al actor a realizar un nuevo juicio para llegar, en definitiva, a igual situación, por lo que una solución así importaría desvirtuar el sentido de las formas procesales, que son meros instrumentos para la observancia de los derechos sustanciales, sobre todo si se tiene en cuenta la edad de la Sra. Cabrera (76 años), quien se encuentra litigando desde el año 2011 a los fines del reconocimiento de su derecho, por lo que no resulta necesario un nuevo juicio de conocimiento ni abrir otra etapa probatoria para esclarecer la cuestión, correspondiendo su tratamiento en esta oportunidad procesal*.”

Continuó diciendo: “*En igual sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Cingolani, Francisco Florencio c/Anses s/Ejecución previsional”, sent. del 10/4/12 revocó una resolución judicial que había limitado el derecho del afiliado a lograr una recomposición de sus haberes previsionales al período dispuesto en la sentencia definitiva, en cuya oportunidad sostuvo que “la limitación temporal de la ejecución vulnera la cosa juzgada, pues la sentencia cuyo cumplimiento procura el actor no sólo establecía una pauta para el cálculo del beneficio, sino que su aplicación permitía determinar el nivel de la prestación para el lapso subsiguiente y hasta tanto fuera incrementado con nuevas disposiciones legales o decisiones judiciales en materia de movilidad” es que señaló que admitir una tesis contraria a la que defiende implicaría un dispendio jurisdiccional obligando al jubilado a iniciar un nuevo juicio de conocimiento a fin de que se le reconozca el monto de su prestación en el periodo descartado.”*

La Sala II el 14.02.2023 en la causa “Campos Toranzos, Marcos Aurelio c/ ANSeS s/ Reajustes Varios” (Expte. N° 15100257/2012) “*confirmó la facultad de los magistrados de la determinación de criterios de movilidad en la etapa de ejecución de sentencia que no fueron contemplados en el pronunciamiento definitivo por una cuestión temporal, con basamento en que los jueces deben siempre resolver según las circunstancias actuales aunque sean sobrevinientes; en atención a la naturaleza alimentaria de la prestación y en dicho caso particular, a la avanzada edad del accionante, argumentando que por razones biológicas posiblemente el actor se vería impedido de afrontar un nuevo proceso y acceder a una decisión útil (Fallos: 330:5342), invocando también razones de economía procesal para arribar a tal decisión”*

1. **SOLICITO ORDENE EXPRESAMENTE EL REAJUSTE DEL HABER**

Solicito que una vez aprobada la ampliación de liquidación, se intime al organismo previsional a que proceda a reajustar el haber de mi mandante , consignando de manera clara el haber aprobado , y que lo sea bajo apercibimiento de aplicar astreintes ejemplificativas por cada día de demora en efectivizar la medida ordenada, como así también se identifique al funcionario responsable de cumplir con la manda judicial , el cual deberá informar si creo la secuenta.

1. **SOLICITO REGULE HONORARIOS**

Solicito a V.S. que se proceda a regular los honorarios profesionales correspondientes a la labor desarrollada en esta etapa de la ejecución, en virtud de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 27.423, el cual establece que, aun sin petición del interesado, al dictarse sentencia se deberán regular los honorarios respectivos de los abogados y procuradores de las partes y de los auxiliares de justicia.

Solicito tome como base regulatoria la suma de 69.91 UMA, teniendo en cuenta que el valor del UMA a la fecha de cierre de la liquidación, $67.632,00 y el monto reclamado $4.727.998,55, con más los intereses al efectivo pago, de conformidad con lo establecido por la ley 27.423 que en su articulo 52 establece: “Aun sin petición del interesado, al dictarse sentencia se regularán los honorarios respectivos de los abogados y procuradores de las partes y de los auxiliares de Justicia.”

|  |  |
| --- | --- |
| Monto de 1ra Liquidacion: $4.727.998,55 | Monto en UMA: 69.91 |

|  |  |
| --- | --- |
| Monto de 2da Liquidacion: $6.095.271,42 | Monto en UMA: 90.12 |

|  |  |
| --- | --- |
| Monto de 3ra Liquidacion: $15.937.498,98 | Monto en UMA: 235.65 |

|  |  |
| --- | --- |
| Monto de 4ta Liquidacion: $26.576.663,39 | Monto en UMA: 392.96 |

**Asimismo, solicito que se respete el honorario mínimo previsto en el artículo 16, último párrafo, de la misma ley, que establece que "los jueces no podrán apartarse de los mínimos establecidos en la presente ley, los cuales revisten carácter de orden público".**

**De conformidad con el artículo 51 de la ley, la regulación deberá expresar el monto en moneda de curso legal y la cantidad de Unidades de Medida Arancelaria (UMA) que éste representa a la fecha de la resolución, indicando que el pago será definitivo y cancelatorio únicamente si se abona el equivalente en moneda de curso legal al valor vigente de las UMA al momento del pago.**

**En consecuencia, solicito a V.S. que regule los honorarios conforme a la normativa aplicable, considerando los intereses, frutos y accesorios que integran la base regulatoria, tal como lo disponen los artículos 22, 23 y 24 de la Ley 27.423**

1. **VISTA CAJA**

Se solicita que se conceda vista de las actuaciones a la Caja de Abogados a través de la plataforma DEOX, a efectos de que proceda a la verificación y/o control de los aportes previsionales, conforme lo establecido en los artículos 51, 53 y 56 del Decreto Ley 15/75 y sus modificatorios.

Asimismo, se requiere que se condene a la parte demandada a integrar el aporte del 2% sobre el monto de la condena, en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto Ley 15/75, la Ley 23.987, la Ley 27.423 y la Resolución 484/10 del Consejo de la Magistratura Nacional.

Datos de la caja de abogados:Av. Sarmiento N º 302/308 de la ciudad de Salta, domicilio electrónico como persona jurídica registrado bajo el CUIT 30518723487.

1. **SOLICITO FIJAR INTERESES SANCIONATORIOS**

Habiendo vencido el plazo para que ANSES cumpla con la sentencia de manera adecuada y considerando su reiterada conducta de reticencia al cumplimiento integral, solicito a V.S. que fije intereses sancionatorios. Estos intereses deben establecerse con claridad, indicando la fecha desde la cual se aplicarán, la tasa correspondiente y la metodología para su cálculo en caso de pagos parciales.

Destaco que estos intereses no constituyen anatocismo, ya que su fuente es una disposición judicial con función punitiva, orientada a corregir la conducta contumaz del deudor. Propongo que se fijen en dos veces y media la tasa de descuento ordinario del Banco Nación, considerando su función tanto resarcitoria como sancionatoria, en línea con lo dispuesto en los artículos 769 y 790 del Código Civil y Comercial de la Nación.

El artículo 790 establece que los intereses sancionatorios imponen al deudor una obligación adicional, no solo para resarcir la mora, sino también para sancionar el incumplimiento. Por ello, estos intereses deben ser superiores a los moratorios, ya que aplicar una tasa más baja incentivaría el incumplimiento y convertiría a los tribunales en una fuente barata de financiamiento para los deudores morosos.

Solicito además:

1. Fecha de aplicación: Que V.S. determine desde cuándo se aplican los intereses sancionatorios, considerando las siguientes posibles fechas:
   * Fecha de sentencia del juez.
   * Fecha de cierre de la liquidación.
   * Fecha de vencimiento de la sentencia ejecutoria.
2. Tasa de interés: La tasa debe superar la pasiva del Banco Nación para garantizar su carácter punitivo, evitando capitalizaciones encubiertas.

Reserva: Me reservo el derecho de ampliar la presente liquidación una vez que V.S. determine la tasa aplicable y el modo de cálculo de los intereses sancionatorios.

1. **Actualización monetaria**

Solicito a V.S. la actualización monetaria de las sumas adeudadas como retroactivo hasta la fecha del efectivo pago, previa declaración de inconstitucionalidad del artículo 7 de la Ley 23.928, modificada por el artículo 4° de la Ley 25.561. La desvalorización sufrida por la moneda a la fecha torna confiscatorio cualquier pago que no contemple dicha actualización.

El 22 de febrero de 2024, la CSJN señaló que los problemas relativos a créditos de naturaleza alimentaria exigen una consideración cuidadosa en favor de los beneficiarios, quienes gozan de protección constitucional (Fallos: 323:1122, “Bianculli”). Aunque en ese caso se trataba de una cuota alimentaria, el criterio aplica igualmente a las deudas previsionales, por su carácter alimentario.

En "Recurso de Queja Nº 5 - G., S.M. y otro c/ K., M.E.A. s/ Alimentos” (CIV 083609/2017), la CSJN resolvió que no considerar la depreciación monetaria de una cuota alimentaria implica desconocer derechos fundamentales y vulnerar principios como la tutela judicial efectiva, celeridad y economía procesal. Este razonamiento también es aplicable a los jubilados, grupo vulnerable protegido por los principios de progresividad y no regresividad, como lo reconoció la CSJN en fallos como "Itzcovich" (328:566), "Sánchez" (328:1602), "Blanco" (341:1924) y otros.

La Ley 21.864, en sus artículos 1°, 2° y 3°, establece la obligación de actualizar haberes jubilatorios cuando no se abonen dentro de los plazos previstos. Esta norma reconoce el impacto de la depreciación monetaria y busca garantizar el valor justo de los créditos previsionales.

El crédito previsional de mi mandante debe ser justipreciado al momento del pago, en virtud de los principios de prudencia, equidad y sana crítica que rigen las decisiones judiciales. No actualizar estas sumas en un contexto inflacionario implica lesionar el derecho de propiedad del beneficiario y desconocer el carácter alimentario de los haberes previsionales.

Incluso el mismo Estado, al dictar el DNU 70/23, reconoció la necesidad de actualizar y repotenciar créditos laborales afectados por la depreciación monetaria, estableciendo un índice basado en el IPC más una tasa de interés pura del 3% anual. Es contradictorio que esta lógica no se aplique también a los créditos previsionales, máxime cuando derivan del trabajo.

La persistente reforma del sistema previsional por parte de los gobiernos, bajo el pretexto de beneficiar a los que menos tienen, en realidad busca ahorrar costos, perjudicando a los jubilados. Esto obliga a los beneficiarios a litigar para obtener lo que por derecho les corresponde, situación que colapsa los tribunales y licúa las deudas mediante retrasos o tasas de interés irrisorias.

Por lo expuesto, solicito a V.S. que declare la inconstitucionalidad del artículo 7 de la Ley 23.928, por su afectación al derecho de propiedad, la integralidad del haber previsional, el desarrollo humano y una vejez digna, derechos protegidos por la Constitución Nacional. Asimismo, que se ordene la actualización de las sumas adeudadas hasta la fecha del efectivo pago, respetando la realidad macroeconómica y las garantías constitucionales de mi mandante

1. **SOLICITO FIJE INDEMNIZACION POR DAÑOS**

La reiterada e injustificada inactividad de ANSES, que obliga a desplegar esfuerzos administrativos y judiciales para hacer cumplir una sentencia que reconoce el derecho a un haber integral, evidencia una conducta negligente que debe ser sancionada. Esta inacción prolongada durante casi una década no solo lesiona derechos fundamentales, como el respeto al proyecto de vida y la reparación integral del daño, sino que también desvirtúa el principio de justicia al licuar deudas mediante el incumplimiento y el uso de tasas irrisorias.

En este contexto, resulta necesario que se fije una indemnización que repare el daño causado, conforme al art. 19 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional y a lo establecido por la CSJN en precedentes como Fallos: 308:1118 y 327:3753. La indemnización debe permitir al beneficiario afrontar los gastos derivados de su condición y garantizar el cumplimiento del principio de reparación integral.

La responsabilidad del Estado por inactividad está claramente configurada en el caso, según lo previsto en el art. 3 de la Ley 26.944. La omisión sistemática de ANSES no puede quedar sin consecuencias, ya que el no cumplimiento de una sentencia judicial coloca al Estado fuera del orden jurídico, tal como lo advirtió la CSJN en el caso "Pietranera".

En palabras de Germán Bidart Campos, "no es justo ni razonable que las consecuencias de las políticas equivocadas del Estado recaigan sobre los gobernados". En este sentido, la inacción de ANSES no solo viola derechos, sino que perpetúa un sistema de desprotección hacia los más vulnerables, quienes tienen derecho a que sus sentencias sean efectivamente cumplidas y respetadas.

Por todo lo expuesto, solicito que se condene a ANSES a abonar una indemnización por los daños ocasionados o, en su defecto, a actualizar y pagar la deuda de manera integral y conforme a derecho.

1. **PLANILLA DE LA LIQUIDACION**

Anexa planilla de liquidación. que solicito tengan como parte del presente escrito, donde se adjunta computo del haber de caja, computo del haber reajustado y retroactivo.

Solicito se corra traslado a la demandada con las copias adjuntadas, y se intime a la demandada a adjuntar RUB histórico de mi mandante y a crear la secuencia de ejecución de sentencia en sede administrativa conforme la sentencia interlocutoria recaída en autos.

1. Hago reserva de caso federal por estar en juego el art 14 bis ,16,17, 18, 28 y 31 de la Constitución Nacional y tratados internacionales por cuanto la demora en poner al pago el haber jubilatorio de manera integral de mi mandante y el comportamiento moroso de Anses, afecta el derecho de propiedad, la división de poderes, de acceso a justicia en un plazo razonable, pero sobre todo el derecho a una vejez digna.

Proveer en conformidad

**JULIA TAMARA TOYOS**

**ABOGADA**

**MAT. FED T 108 F 978**

1. Juzgado Federal de Salta N° 2 , 19.10.2022, Expediente N° FSA 25000393/2010 “ABRAHAM, RUBEN DARIO c/ ANSES s/REAJUSTES VARIOS” . [↑](#footnote-ref-1)
2. Sala II, Cámara Federal de Salta “GAMARRA, MARIA DEL HUERTO DOLORES c/ ANSES s/REAJUSTES VARIOS” Expte. N°41000298/2005 (Juzgado Federal N° 2 de Jujuy) , 26 de abril de 2016. [↑](#footnote-ref-2)